



Ecuador: un frágil tablero en el que se mueven las fichas

Milagros Aguirre A.

Quito, mayo de 2025

Los informes de coyuntura cuentan con el auspicio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Berlín, Alemania

En las pasadas elecciones del 13 de abril de 2025, Daniel Noboa Azín, del partido Acción Democrática Nacional (con siglas ADN), resultó ganador como presidente de Ecuador para el período 2025-2029. Participó en la contienda con cancha inclinada, como candidato-presidente, sin pedir licencia, con prensa a su favor y con una fuerte campaña centrada en redes sociales. Con once puntos de diferencia (un millón doscientos mil votos) sobre su contrincante, Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, Noboa asumirá el nuevo mandato el 24 de mayo y deberá gobernar un país con crecientes demandas sociales, desigualdades tremendas, una violencia imparables (2361 asesinatos en el primer trimestre del año 2025, 26.2 por día y 65% más que el año pasado) y con una crisis económica que se complica con los índices de desempleo que no bajan.

Además, con temas álgidos en la agenda de pendientes, como los subsidios a los combustibles; las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, cuya sostenibilidad es cada vez más frágil; las crisis ambientales incluido el desastre ambiental y social que está produciendo la minería ilegal en la Amazonía. Se suman la crisis energética y, por si no faltaran más problemas, las recientes epidemias de fiebre amarilla, tosferina y, en la Amazonía, leptospirosis por agua contaminada que reflejan el abandono de las poblaciones más vulnerables que, en pleno siglo XXI, no tienen agua potable ni alcantarillado y, por si no bastara eso, una población infantil con altos índices de desnutrición y sin las vacunas necesarias.

Noboa tiene algunas ventajas: ya sabe lo que es gobernar, ha tenido año y medio como ensayo y debería tener en carpeta los principales problemas del país. El presidente ya no puede improvisar, ya debería saber, por ejemplo, que, de no empezar a resolver problemas estructurales, la realidad le va a estallar en la cara y el malestar social le va a pasar factura.

Noboa ha demostrado su habilidad política. Se ha aliado con las élites y el empresariado de la sierra (su vicepresidenta, María José Pinto, es parte del juego), pero también ha sabido mover fichas en la Asamblea para tener una mayoría (que tal vez solo dure para temas coyunturales) incluyendo a asambleístas de tiendas políticas como Pachakutik o como aquellos llamados independientes que se han desgranado de la Revolución Ciudadana. Dice un dicho popular que la política puede convertir a amigos en enemigos y a enemigos en amigos. Noboa y sus asesores lo saben. Necesitan una mayoría que dé cierto margen de gobernabilidad en este país partido en dos desde hace casi dos décadas. Que haya resultado electo presidente de la Asamblea Niels Olsen (y no la mamá del presidente, Anabela Azín, una de las asambleístas más votadas), dice mucho de su juego político: por un lado guarda las formas y por otro concreta una *aplanadora* en la Asamblea, como la que tuvo Rafael Correa en su momento, que garantizará al gobierno aprobar un buen número de leyes e incluso plantear reformas a la Constitución.

Correístas y anticorreístas tienen cero en autocrítica

Con el estrecho margen de la primera vuelta electoral, ganar con uno o dos puntos de diferencia, hacía pensar que ninguno de los candidatos iba a aceptar la derrota y que el nivel de confrontación sería enorme. No fue así. La diferencia de 11 puntos entre Noboa y González no daba lugar a dudas, aunque algunas voces del correísmo, incluida su candidata, no lo han aceptado aún el triunfo de Noboa y han denunciado un *mega fraude* mediante *transferencia de tinta* producto de la alquimia, de una pócima mágica con la que se supone se fabrican las papeletas electorales y que, al doblarlas, el voto de un candidato pasa a la casilla del otro. Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua se sumaron al reclamo. A mal palo se arrimaron, al menos, si querían conservar algunos aliados que, aunque no hayan sido correístas, apostaban por un gobierno de izquierdas, más afín a la recuperación de lo público y a los anhelos de justicia social, equidad o medio ambiente.

No parece haber autocrítica en el correísmo. Pero tampoco la hay en el otro lado, en el de los anticorreístas, que, en parte, no ganaron porque el país apueste al modelo que promete Noboa, sino porque consideraron que el presidente-candidato era el “mal menor” o el “menos peor”, en un país acostumbrado últimamente a que las elecciones no signifiquen la apuesta a un modelo o a unas ideas, sino el rechazo al otro. Muchos de los votos que tuvo Noboa tienen que ver más con el temor de clonar el modelo Venezuela, ejemplo del socialismo del siglo XXI.

Si el correísmo ha cometido varios errores, el anticorreísmo también: los últimos gobiernos han desmantelado los servicios públicos, a cuenta de acabar con un Estado obeso, perjudicando directamente a los ciudadanos y a las poblaciones más vulnerables. Las consecuencias se ven hoy: hospitales sin medicinas ni insumos médicos, escuelas y colegios abandonados, infraestructura pública a la que no se les ha dado un mínimo mantenimiento, instituciones ineficientes unas y otras cooptadas también por los operarios de las mafias. A eso se suma la persecución judicial, en unos casos, y la victimización, en otros, de personajes de la política. Algo así como la venganza entre bandos convertida en política de Estado.

En la disputa correístas y anticorreístas hay un gran perdedor: el pueblo ecuatoriano, que tuvo que escoger entre dos modelos autoritarios y que tiene que sobrevivir en la vida diaria sin empleo adecuado, con una institucionalidad rota, un sistema deteriorado de salud pública, sin acceso a la justicia, amenazado por las bandas delincuenciales y con miedo de ser víctima colateral de la *guerra* iniciada por el gobierno para enfrentarlas como pasó, terriblemente, con los cuatro niños de Las Malvinas, muertos en circunstancias oscuras luego de haber sido sometidos y torturados en manos de militares (con confesiones de cuatro de los integrantes de una patrulla de 16 personas). Casos de abuso y de

desapariciones forzadas empiezan ya a sumarse y los organismos de derechos humanos han dado varias veces señales de alerta.

La guerra sigue...

El gobierno insiste en una guerra contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada. Insiste en llamar a grupos delincuenciales terroristas. La emboscada a militares en el Alto Punino, zona afectada por la minería ilegal (considerada un delito en todas sus letras) desde hace tres años y que costó la vida de 11 soldados será pretexto para seguir esa guerra. Frente a los incidentes en esa zona quedan muchas dudas: la prensa¹, activistas, organismos de derechos humanos y hasta la Iglesia vienen denunciando las actividades mineras en la zona a vista y paciencia de las autoridades. También han denunciado la violencia a la que están sometidas las comunidades. Se habla de una red de empresas fantasmas que han exportado 1300 millones de dólares en oro y, el mismo gobierno, habla de infiltraciones en los operativos de control en los que se ha incautado o destruido maquinaria minera. Se sabe también que empresas mineras llamadas legales compran el oro de la minería ilegal. Una investigación periodística titulada *Dorada opacidad*, llevada a cabo por Plan V, Clip y convoca.pe da cuenta de que 17 empresas y 39 personas de difícil ubicación realizaron multimillonarias exportaciones de oro desde Ecuador. Entre los mayores exportadores se encuentran una persona que fue lustrabotas y otro que fue asesinado en Guayaquil mientras era investigado por narcotráfico. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Mientras esta guerra sigue y la economía criminal avanza, las ciudades ecuatorianas ahora duermen temprano, los negocios han cerrado por miedo a la violencia o por la presión de extorsionadores. Las poblaciones van normalizando la violencia: no salen de casa para no ser asaltados o trabajan a puerta cerrada, discretamente, para no ser víctima de los vacunadores². En poblaciones como el Coca o Lago Agrio, Esmeraldas o Durán, ya no sorprenden ni los muertos que se suceden a diario: “se están matando entre ellos, entre los delincuentes”, como si esa fuera una solución y la mejor forma del gobierno de actuar como Pilatos: lavarse las manos y dejar que se ajusten cuentas entre bandas hasta que alguna se rinda o desaparezca.

Todo indica que Noboa quiere replicar la estrategia Bukele, además, con el apoyo de EE.UU. y con el apoyo de gran parte de la ciudadanía que ya no aguanta más. Esa guerra ya va cobrando vidas inocentes y recién empieza. Ahora, con la legitimidad que le dan las cifras electorales y con la balanza a su favor, es probable que esa arremetida se intensifique.

¹ <https://planv.com.ec/investigacion/una-red-empresas-fantasmas-ecuador-exporto-500-millones-dolares-oro/>

² Vacunadores es el sinónimo de extorsionadores.

En el primer proyecto de ley enviado a la Asamblea, el gobierno le declara esa guerra a “la economía criminal”. Lo hace con un diagnóstico previo³ que, como dice el diario La Hora: “en más de 30 páginas de la ley económica urgente para desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno, el Ejecutivo no solo presenta una propuesta legal. También dibuja un retrato contundente y sin filtros de cómo el crimen organizado ha construido una economía paralela que financia, corrompe, recluta, extorsiona y asesina a través de redes cada vez más sofisticadas”.

Sin embargo, el proyecto de ley ya ha causado rechazo. Es un peligroso cheque en blanco para cualquier tipo de abuso policial y militar. Luis Córdova-Alarcón, analista en temas de seguridad, señala que, aunque el propósito sea legítimo — desarticular las economías criminales— las formas escogidas para hacerlo son desatinadas y solo traerán más violencia e impunidad⁴. “En vez de apuntar con seriedad a las economías criminales, se vislumbra un escenario de guerra sobre la base de supuestos erróneos: no comprende la naturaleza de las amenazas, sobredimensiona la respuesta estatal y, lo más grave, invisibiliza la penetración criminal en el Estado”, escribe Córdova.

¿Repensar el país?, ¿refundarlo?

Más allá del análisis poselectoral o de las teorías dignas del realismo mágico, este nuevo período ¿podrá ser una tregua para repensar el país? ¿una oportunidad de salir del binarismo en el que ha vivido el Ecuador del siglo XXI? ¿podrá el país romper la *guerra fría* entre correístas y anticorreístas que lo tiene partido en dos? ¿Es posible vivir en democracia, respetando el pensamiento ajeno o hemos de vivir en confrontación perpetua y en permanentes estados de excepción? ¿Se puede reinventar una izquierda menos autoritaria, más democrática, más apegada al legado de Pepe Mujica o del chileno Boric y menos cercana al modelo cubano, venezolano o nicaragüense?

Hay voces que le piden a Noboa que convoque a una nueva Constituyente. De concretarse esa vía, Ecuador enfrentará tres elecciones más: una para ver si la ciudadanía acepta la propuesta, otra para votar por quienes serán parte de la constituyente y otra más, para aprobar el nuevo texto constitucional. La campaña perpetua. La incertidumbre constante y, como consecuencia, más inestabilidad y menos inversión. La permanente refundación del país. Pero no es otra Constitución lo que va a cambiar al país ni a la clase política ecuatoriana.

Los detractores de una Constituyente argumentan que las élites del país quieren “demoler la planificación pública, el Consejo de Participación y Control Social

³ <https://www.lahora.com.ec/pais/economia-que-mata-crudo-diagnostico-gobierno-crimen-organizado-ecuador/>

⁴ <https://planv.com.ec/historias/politica/noboa-ley-economias-criminales/>

(CPCCS), el sistema de justicia, el modelo electoral... quitándole al pueblo su poder”.

La verdad es que, aunque haya un marco legal y constitucional que en principio otorga el poder a la ciudadanía con varios mecanismos, garantías y derechos, las instituciones como el CPCCS, Consejo Nacional Electoral, Corte Nacional Justicia y Consejo de la Judicatura, no han estado a la altura, han sido cuestionadas, sea por ineficiencia o, lo que es peor, por la corrupción que las ha diezmado y que ha contaminado casi todas las instancias del país. Así que el poder popular ha quedado solo en la retórica y en leyes y enunciados de letra muerta.

Los defensores de una nueva Constituyente en cambio argumentan que para desterrar al correísmo hay que desmontar la Constitución de Montecristi. El debate recién empieza y no está claro cuál es el marco constitucional en el que pretende gobernar Daniel Noboa o qué cambios quiere proponer y someter a voluntad popular. Por lo pronto parece que se lo va a tomar con calma: le bastaría con una Asamblea a su favor para iniciar reformas constitucionales sin necesidad de patear nuevamente el tablero.

Pero, además del debate constituyente, hay otros debates pendientes. El movimiento indígena, por ejemplo, ¿podrá rearmarse después de la mala experiencia electoral? ¿Le interesará retomar un diálogo que quedó pendiente desde 2022? Seguramente, a partir del 24 de mayo de 2025, día de la asunción de mando de Daniel Noboa para el período 2025-2029, las fichas se moverán en el tablero para volverse oposición y resistencia.

Ecuador hoy se debate entre dos posibilidades: o inicia un proceso de diálogo maduro, de autocrítica, reflexión y construcción o se mantiene en sostener esta premisa con la que ha vivido desde su vida republicana y que dice así: “último día de despotismo y primero de lo mismo”.